



Artur Mas y Xavier Trias se saludan antes de iniciar su reunión en el Palau de la Generalitat. / DOMÈNEC UMBERT

Trias adelantará recursos al Govern pese a los 235 millones que le debe

El alcalde de Barcelona sale de la cita con Mas sin compromiso ni calendario para cobrar

VÍCTOR MONDELO / Barcelona

Flotaba por el Palau de la Generalitat ese clima de suficiencia y relajo que propician los encuentros amables. En los que no hay lugar para lo incómodo. Especialmente se advertía esa actitud en el presidente de la Generalitat. Quizás todavía se hallaba Artur Mas bajo los efectos de la reunión que acababa de mantener con Xavier Trias y cuyos resultados, al menos para los intereses de Barcelona, fueron nulos.

Del encuentro entre el jefe del Ejecutivo catalán y el alcalde sólo se esperaba un compromiso, un punto del día por discutir y cumplir: el retorno de los 235 millones que la Administración autonómica adeuda a la local. Eran 205 el pasado jueves, cuando la segunda teniente de alcalde, Sònia Recasens, actualizó la cifra, pero ayer Trias se avino a decir la verdad y toda la verdad y sumar otros 30 al recibo impagado, correspondientes, éstos, a los que las empresas municipales no han percibido.

Descartado estaba de antemano el anuncio de una devolución inmediata, ni tan sólo de una compensación parcial de lo adeudado a corto plazo, pero en el terreno de lo plausible aparecía la posibilidad de fijar, como mínimo, un calendario aproximado para conocer cuándo se empezarán a resarcir los flagrantes incumplimientos económicos que está generando la confluencia de dos mandatos de CiU en los dos centros de

mando de la plaza Sant Jaume.

Se desmoronaron esas ínfimas expectativas con sólo empezar a locutar el primer edil barcelonés. «Venimos a ponernos al servicio del país», fue la primera sentencia que se coló entre los labios de un Trias exultante en su papel de fiel prestamista del Govern. La expresión «al servicio» se repitió en tantas ocasiones como

las deudas del Gobierno central con la Generalitat y el excesivo objetivo de déficit impuesto se emplearon como excusas para que Mas pueda continuar engrosando su adeudo con el Ayuntamiento. El paso de dicho objetivo del 0,7% al 1,5%, tal y como reclama el *president* al Ejecutivo de Mariano Rajoy, se dibujó como requisito indispensable para

empezar a devolver la deuda a las arcas barcelonesas.

Realizado este ajado paréntesis argumentativo, Trias regresó a su también reiterativo papel. «No venimos sólo a pedir dinero». «No queremos competir con la Generalitat como ha pasado en otras ocasiones». «Ponemos la equilibrada situación económica del Ayuntamiento a

favor de una Generalitat que está siendo maltratada».

Esta entregada tesitura monopolizó la intervención del alcalde, en la que sólo confirmó la reconstitución de la comisión bilateral en la que, teóricamente, se dilucidará qué proyectos comprometidos la Generalitat

«No me lo tiene que devolver, lo pago yo porque quiero», espetó el primer edil

El PP le recordó que no es «delegado de la Generalitat» en la capital catalana

aceptará desarrollar y cuáles no. Aunque ya precisó el alcalde que determinadas partidas, como las becas comedor, seguirán siendo cubiertas exclusivamente por el Ayuntamiento, sin necesidad de que el Govern financie la proporción que le pertoca ni reembolse lo adelantado por el Consistorio. «Esto no me lo tiene que devolver, lo pago yo porque quiero», espetó Trias mano en pecho.

Ante tal aluvión de parabienes no pudo sino Mas «agradecer la disposición del alcalde para compensar nuestras debilidades financieras».

Más displicente debió resultar la valoración del portavoz socialista, Gabriel Colomé, que tituló: «Baño y masaje en el Palau» su reflexión sobre lo ayer acaecido, en la que tildó de «insulto a la inteligencia» el tono utilizado por Trias para hablar del uso de los recursos públicos de la ciudad. El líder del PP, Alberto Fernández, incluso creyó oportuno recordar al primer edil que «no es el delegado de la Generalitat en Barcelona». Trias insistió, incongruente, que tampoco es su banquero.

Las entidades alertan del intrusismo en centros sociales para rebajar costes

Denuncian que empresas multiservicios pueden gestionar guarderías o geriátricos

CRISTINA RUBIO / Barcelona

La crisis obliga a aceptar a presupuestos ceñidísimos que obligan a hacer auténticos cambalaches para cuadrar las cuentas. Una estrategia que las entidades sociales denuncian porque, bajo su criterio, empresas que no son propias del tercer sector ofrecen servicios a guarderías o centros sociales por un precio muy inferior al que se fijaba hasta ahora sin importar las garantías ni la calidad asistencial que ofrecen.

Según la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector, que aglutina a más de 7.000 asociaciones catalanas, este tipo de empre-

sas pueden llegar a rebajar un 40% los costes de los servicios que prestan a los equipamientos sociales, por lo que ganan la mayoría de concursos públicos. Esta es la fórmula que usan los ayuntamientos para controlar un presupuesto marcado por los severos recortes económicos.

«Esto no es una subasta ni Eurovegas», alertó ayer Àngels Guiteras para luego denunciar que «no se puede jugar con los servicios sociales ni equiparar la adjudicación de contratos públicos con este sector como si fuera el de la construcción».

Para la Taula d'Entitats del Tercer Sector, el problema va más

allá de la simple reducción de costes. Según el organismo, «si se «revientan los precios de esta forma es imposible garantizar una calidad asistencial». De hecho, Guiteras hizo ayer un llamamiento a todas las administraciones públicas –tanto a la Generalitat como a los propios Consistorios– para frenar estas «malas prácticas» ya que, a su parecer, suponen «un retroceso de 10 o 15 años en las políticas sociales».

Para la entidad, los servicios de atención a las personas como las guarderías, las residencias de ancianos o de atención a discapacitados, deberían tener un trato diferente

que priorizara la calidad técnica y en el que el precio supusiera un máximo del 10 % de la puntuación total para ganar una adjudicación.

La Taula d'Entitats del Tercer Sector y la Confederació Empresarial de l'Economia Social de Catalunya también aprovecharon la ocasión para denunciar los diferentes impagos de los gobiernos públicos al tercer sector que ascienden a los 620 millones de euros.

También reclamaron que las ofertas de las entidades se valoren con el IVA incluido, ya que las entidades sociales están exentas de pagar este impuesto a diferencia de las empresas mercantiles.